

Segundo; sáquese testimonio de este fallo para su publicacion y elévense los autos á la Corte Suprema de los Estados Unidos Mexicanos para su revision, como disponen los artículos 13 y 27 de la citada ley de 20 de Enero. Notifíquese.—*L. Manzanilla.*—Ante mí.—*José Anaclito Castillo.*

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Febrero veintiuno de mil ochocientos setenta y dos.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juez de Distrito de Yucatan por los CC. Julian Ucan, Norberto Uuh, Juan de la Rosa Bé y Manuel Yuit contra el C. Jacinto Baas, juez auxiliar de San José Izal por violacion de la garantía á que se refiere el art. 59 de la Constitucion federal; y considerando: que en el expediente aparece, que el juez auxiliar de Izal obliga á los quejosos contra su voluntad á que ayuden á fabricar la iglesia de Izal, á empedrar las calles del mismo lugar, á sacar y romper piedras y á otros trabajos semejantes, lo cual importa la violacion de la garantía respecto de la que los quejosos piden amparo; que aunque el goce de esa garantía está en suspenso por la ley de 19 de Diciembre del año próximo pasado, la suspension no es aplicable en el caso, porque el presente juicio se refiere á hechos anteriores y porque la suspension no se ha decretado para objetos como los á que los quejosos se refieren, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada el 9 de Enero próximo pasado por el juzgado de Distrito de Yucatan que declara, que la justicia de la Union ampara y protege á los quejosos contra los actos del C. juez auxiliar del rancho de San José Izal que les exige trabajos personales sin retribucion y sin su pleno consentimiento.

Devuélvanse las actuaciones al juzgado de que proceden copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el tomo.

Así lo mandaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Leon Guzman.*—Procurador general.—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Son copias.—México, Febrero veintiuno de mil ochocientos setenta y dos.—*Lic. Agustín Peralta,* oficial mayor.

## CRIMINAL.

*Causa instruida en el juzgado 2º de Distrito de México, contra Santos Meza, por hurto y venta de un libro perteneciente á las oficinas públicas.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL  
DEL JUZGADO DE DISTRITO.

C. Juez.

El promotor dice: que estando convicto y confeso Santos Meza del delito de sustraccion de un libro perteneciente á la junta de crédito público que su padre tenía en guarda, cuya confesion está corroborada y ratificada por su defensor, el cual pide se le dé por compurgado con el tiempo que lleva de prision, alegando en favor de Meza como circunstancia atenuante el corto valor del libro en su parte material; pero conociendo al mismo tiempo, que como objeto perteneciente al gobierno, bajo este aspecto es como debe considerarse el objeto robado. En efecto, las hojas que se arrancaron al libro pudieron contener asentamientos de tal naturaleza, que importaran no solo pecuniarios

sino de otro género para la nación que sea difícil reponer, y por esta causa el delito no puede reputarse tan leve como espresa el defensor, de manera que el ciudadano juez, usando del arbitrio que la ley le concede para la imposición de la pena, lo señalará la que estime conveniente según las circunstancias todas del caso.

México, Setiembre diez y ocho de mil ochocientos setenta y uno.—*Moctezuma.*

#### *Sentencia del C. Juez 2º de Distrito.*

México, Setiembre treinta de mil ochocientos setenta y uno.

Vista la presente causa seguida contra Santos Meza por hurto de un libro perteneciente al archivo del Ministerio de Hacienda: vistas las diligencias del sumario; la confesion con cargos; lo alegado por el defensor y lo pedido por el ciudadano promotor fiscal, y visto en fin lo que debía.

Considerando: que el delito porque se ha acusado al reo se halla legal y suficientemente comprobado, y que el expresado Santos Meza está convicto y confeso de ser el autor del hurto del libro, y sin poderse reputar excepciones admisibles las que en su defensa ha dado; y debiendo al mismo tiempo tenerse presente, que aun dándosele al libro hurtado el valor originario que los peritos han designado, el caso se halla comprendido en el artículo 52 de la ley de 5 de Febrero de 1857, y sin que haya mas circunstancia agravante que la contenida en la fraccion 1ª del artículo 53, puesto que el libro era perteneciente al archivo del Ministerio de Hacienda. Por tales razones pues y haciendo uso del arbitrio que el citado artículo 53 otorga, fallo: que debía de condenar y condenaba al reo Santos Meza á la pena de tres meses de obras públicas, contados desde la fecha de su prision. Hágase saber y previa citacion fiscal, remítase la causa al tribunal superior de circuito. Lo decretó y firmó el ciudadano juez

2º de Distrito Lic. José M. Canalizo. Doy fé.—*José M. Canalizo.*—*Inocencio Santalla,* secretario.

#### *Pedimento del C. promotor fiscal del tribunal de Circuito.*

El fiscal dice: que el veintinueve de Junio último, el inspector Tomás Calvillo, remitió á la disposicion del ciudadano gobernador, á Manuel Sanchez, que vendia en el empeño de los Campuzanos, un libro sellado; consignado al Juez de Distrito, probó con dos testigos que lo compró á otra persona en diez reales en la tienda de Pequín (fojas 4 y 5;) presentado el libro al oficial mayor del Ministerio de Hacienda dijo, (fs. 8.) que pertenecía á la junta de crédito público; el presunto reo fué puesto en libertad (fojas 8,) y presentó despues á Santos Meza quien le habia vendido el libro; tomada su declaracion (fojas 11,) dijo que su padre Pascacio Meza, portero de dicho Ministerio y á quien el Ministerio habia dejado en guarda unos cajones, al salir el gobierno de esta capital cuando la intervencion, se lo habia dado para que dispusiera de él; formado el respectivo careo (fojas 13) Santos confesó no haberlo recibido de Pascacio sino que lo tomó sin su conocimiento; se declaró bien preso el reo (fojas 15), se valuó el libro en 24 pesos (fojas 26 y 27); se le tomó confesion con cargos y oido en defensa, el juez, con fecha de treinta de próximo pasado Setiembre, lo sentenció con fundamento del artículo 52 y fraccion 1ª del 53 de la ley de 5 de Enero de 57, á tres meses de obras públicas contados desde la fecha de su prision, que habiéndose acordado desde el 5 de Julio, se cumplan los tres meses en igual fecha del actual; notificada al reo la sentencia en 3 del presente, espuso, que desde el dia anterior se habia cumplido el término, quizá porque contaba los dias desde el 3 de Julio que fué aprehendido: el

que suscribe considerando: que el valor del libro hurtado es de 24 pesos y que no hubo otra circunstancia agravante que el abuso de confianza, pues que extrajo el libro de los cajones del archivo traído de Monterey y encomendados una parte á Pascacio Meza, su padre, cree que la sentencia es justa y por lo mismo pide á esa superioridad se sirva confirmarla por sus propios fundamentos, y estando acordado por el superior auto de 6 del presente que conforme al decreto de 3 de Diciembre de 69 el juez pusiera al reo en libertad, lo que se le comunicó en 7, nada tiene que pedir el ministerio fiscal sobre el particular.

México, Octubre diez de mil ochocientos setenta y uno.—*Antonio Aguado.*

#### *Sentencia del Tribunal de Circuito.*

México, Diciembre veintiocho de mil ochocientos setenta y uno.

Vista esta causa instruida contra Santos Meza por hurto de un libro perteneciente á una de las oficinas del gobierno; la sentencia de 30 de Setiembre del presente año en que el C. juez 2º de Distrito, con fundamento del art. 62 de la ley de 5 de Enero de 1857 y usando del arbitrio que concede la ley 8º, tit. 31, part. 7ª, condenó á Santos Meza á tres meses de obras públicas, contados desde la fecha de su prisión; lo pedido por el C. fiscal, con lo demás que se tuvo presente y ver convino. Por sus propios legales fundamentos se confirma la sentencia de 1ª instancia, con prevención al juez de que devuelva al Ministerio el libro hurtado por Meza, y deje á disposicion del mismo Ministerio los cajones que habia mandado estuviesen á la suya. Hágase saber y con testimonio de este auto devuélvase al juez la causa para su ejecucion, previniéndole que verificada devuelva el proceso para elevarlo á la Suprema Corte de Justicia.

Así por unanimidad lo proveyeron los

CC. Presidente y Magistrados que forman la primera sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito fungiendo como de Circuito y firmaron.—*Manuel Posada.*—*Pablo M. Itinera.*—*José M. Herrera y Zavala.*—*José M. Guerrero.*—*A. Zerecero.*—*Cirio P. Tagle*, secretario.

#### *Pedimento del C. Procurador general de la Nacion.*

El procurador general de la nacion dice: que en la causa instruida contra Santos Meza en el juzgado 2º de Distrito de esta capital por hurto y venta de un libro perteneciente á las oficinas públicas, y que con otros documentos se hallaba depositado en casa del portero del Ministerio de hacienda el juez de Distrito pronunció sentencia definitiva condenando á Santos Meza á tres meses de obras públicas. Dicha sentencia fué confirmada en todas sus partes por la 1ª sala del tribunal superior del Distrito que funciona como de Circuito; agregando, que el libro fuese devuelto al Ministerio de hacienda á cuya disposicion quedarán tambien los cajones depositados en poder del portero. Como esas ediciones no alteran lo sustancial del fallo, este ha causado ejecutoria; y en cuanto á procedimientos, solo llama la atencion que no se haya cuidado de dar fé judicial de los sellos que contenia el libro, y de las hojas que fueron arrancadas. Uno y otro punto eran importantes, y pudieron haber servido para el mejor esclarecimiento de los hechos.

El procurador general pide, que haciéndose una advertencia sobre este punto, se dé por revisado el proceso.

México, Febrero seis de mil ochocientos setenta y dos.—*L. Guzman.*

*Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Febrero veintiuno de mil ochocientos setenta y dos.

Como pide el C. procurador general trascribiéndose su pedimento y en consecuencia devuélvanse las actuaciones respectivas y archívense á su vez el tomo.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*J. M. Lafraqua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auzá.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Febrero veinticuatro de mil ochocientos setenta y dos.—*Fernandez.*

## AMPARO.

*De garantías promovido ante el juzgado de Distrito de Yucatan por varios comerciantes de Mérida, contra el C. tesorero general del Estado que exige el derecho de consumo á la harina que han importado los quejosos al Estado, en los buques "Dos de Mayo" y "Veloz Veracruzano."*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito.

El fiscal dice: que los señores Zapata, Ibarra, Dondé y compañía, Manuel Dondé Cámara, Gregorio Milan, Rafael Trava, E. Avila de Regil y H<sup>o</sup>, Ramon Aznar Perez y la sociedad Castellanos y Dominguez todos del comercio de esta capital, solicitan amparo contra los actos del C. tesorero general del Estado que les exige el pago de veinte reales por tercio de harina nacional, conforme á los decretos locales de Julio de 1867, Marzo de 1868 y Febrero de 1871, que aseguran ser contrarios á la fraccion 9<sup>a</sup> del art 72 de la Constitucion y su ley reglamentaria de 2 de Mayo de 1868, pretendiendo igual amparo contra el decreto tambien local de 6 de Octubre del año pró-

ximo pasado por violacion de las garantías que otorgan los artículos 17 y 22 de la propia carta fundamental. El infrascrito al examinar estas diligencias, encuentra que por mas esfuerzos que hacen los solicitantes para colocarse en el lugar del C. Eduardo Arana al merecer el amparo contra la imposicion de la harina nacional decretada por el Estado en 19 de Julio de 1867 y 24 de Marzo de 68, no es posible conseguirlo hoy, por la sencilla consideracion de que, cuando al Sr. Arana se le otorgó aquel amparo no estaba gravado el consumo de los efectos del Estado con el derecho que se imponía á la harina; pero en la actualidad, el decreto de 7 de Agosto del año pasado viene igualando la harina nacional con el derecho de consumo que se impone á los efectos del país, presentando ahora el art. de la ley á que se contrae el amparo, un gravámen menor del 25 p<sup>o</sup> á que están sujetos los productos del Estado; de manera que ya no se infringe como entonces el decreto general de 2 de Mayo 1868, reconociéndose mas esta verdad si se tiene en cuenta el carácter y condiciones que el citado decreto posterior de 7 de Agosto último establece para los efectos de su consumo, y la competencia del Estado para legislar sobre actos de su administracion interior. El otro punto de amparo se hace consistir en la facultad económica con que la ley de 6 de Octubre de 1871 reviste á los empleados de hacienda para el cobro y ejecucion de sus derechos, pretendiéndose probar con esto, que se viola la garantía constitucional que acuerda el art. 16; pero como bien se advierte este artículo no se refiere á los actos que administra una ley, pues que entonces no se hace fuerza sino que se procede de la manera conveniente á la naturaleza del crédito y para dejar expedita la administracion que de otro modo podria ser envuelta en cuestiones de simple tramitacion y que no deben causar perjuicios.

De lo expuesto resulta:

Primero; que la imposicion de la harina